

Santiago, uno de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-2828-2020 del Segundo Juzgado Civil de Chillán, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós, acoge la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, intentada por doña Claudia Lorena Cifuentes Manríquez en contra el Fisco de Chile y dispone el pago de una indemnización ascendente a \$15.000.000 (quince millones de pesos).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Chillán, por sentencia de veintiséis de septiembre del año dos mil veintitrés, la confirma con declaración, aumentando el monto de la indemnización dispuesta en primera instancia a la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos).

Contra esa sentencia la parte demandada, dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que, la demandada, deduce recurso de casación en el fondo invocando cuatro vulneraciones.

En primer lugar, indica que se ha infringido los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de la Ley N° 19.123.

Señala que el fallo recurrido incurrió en el vicio denunciado, al fundamentarse el rechazo de la excepción de reparación satisfactiva, en el hecho que el otorgamiento de tales beneficios no impide el accionar nuevamente para obtener una indemnización de perjuicios del órgano jurisdiccional.

Destaca que la demandante percibe un monto mensual, por concepto de pensión de viudez, emolumento que resulta incompatible con cualquier otra pretensión indemnizatoria, incluida la búsqueda mediante la acción que da lugar a la presente causa, toda vez que la referida pensión, tiene por objeto la reparación del perjuicio moral y patrimonial emanados a causa del actuar ilegal de agentes del estado.



En segundo lugar, denuncia la infracción de ley por falta de aplicación y contravención formal del estatuto legal especial de calificación de las víctimas de prisión política y tortura, establecidos en la Ley N°19.992 en su artículo 1.

Expone que la demandante no se encuentra reconocida ni por tanto calificada como víctima por la Comisión de Verdad y Reconciliación en el Informe Valech, previsto en la Ley N°19.992, consecuentemente tampoco es beneficiaria de pensión de reparación como presa políticas y/o torturada, la compensación que recibe es en su calidad de viuda de víctima de violaciones a los derechos humanos, por lo que no resultaba aplicable la normativa especial, por lo que debió acogerse la excepción de limitación de justicia transicional y desestimar la demanda.

Como tercer error de derecho, denuncia la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, toda vez, que la sentencia infringe el artículo 1698 del Código Civil, al invertir la carga de la prueba, en relación con el artículo 2314 del mismo cuerpo legal.

Indica, que conforme a la naturaleza de la acción deducida y al expreso tenor de la interlocutoria de prueba, la demandante debía necesariamente acreditar la existencia, origen, naturaleza y monto de los daños y no sólo la causa de pedir. Así las cosas, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, lo que no ocurrió.

Por último, denuncia como cuarto error de derecho, que la sentencia ha infringido igualmente el artículo 2332 del Código Civil, en relación a los artículos 19 y 22, 2492, 2497, 2514 y 2314 del mismo cuerpo normativo.

Espeta que al rechazar la excepción de prescripción de las acciones civiles extracontractuales deducidas y concluir que éstas son imprescriptibles, se niega la aplicación del instituto de la prescripción como regla general de prescripción extintiva.



También señala que la sentencia incurre en el error de derecho por falsa aplicación de tratados internacionales, los que, en ningún caso contemplan la imprescriptibilidad de las acciones civiles.

Con base en lo anterior, solicita se acoja el recurso, se anule la sentencia de segunda instancia que confirma la de primera, dictando otra de reemplazo que rechace la demanda deducida.

SEGUNDO: Que, como se desprende de autos, son hechos indiscutidos y asentados en el considerando noveno y décimo segundo del fallo dictado por el Segundo Juzgado Civil de Chillán.

1.- La madre de la demandante, doña Fidelisa Manríquez fue privada de libertad por agentes del Estado en septiembre de 1973 hasta noviembre de dicho año por motivos políticos.

2.- A raíz de la privación de libertad de su madre, la demandante, en su condición de niña, quedó sola y al cuidado de terceros, cuestión que le ocasionó daño psicológico, derivado del alejamiento de su madre, el estado de soledad y desprotección que la privación de libertad le significó.

3.- La calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos de doña Fidelisa del Carmen Manríquez Ramírez.

Y en lo referente a la concesión de beneficios a la demandante, el tribunal de primera instancia indica que no se rindió prueba alguna de haber otorgado el demandado algún tipo de prestación a la actora. En tanto que el fallo confirmatorio refiere en su razonamiento cuarto: *“De lo que se viene diciendo fluye entonces, que Claudia Lorena Cifuentes Manríquez, no ha sido beneficiaria de prestaciones estatales específicas derivadas de la detención de su madre Fidelisa Manríquez Ramírez y la pareja de esta José Guevara Iribarra, ambos reconocidos a través del Informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, como víctimas de privación de libertad y torturas por razones políticas”*.

TERCERO: Que, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados a la



actora, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, también debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6, inciso tercero, de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los que, de aceptarse la tesis del fallo, quedarían inaplicadas.

Por otra parte, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, los que no pueden ser incumplidos a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

En efecto, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, ya que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce al momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente.

De esta manera, se trata de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado.

La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.



Así las cosas, y en el contexto descritos, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

QUINTO: Que, en relación con la excepción de reparación satisfactiva, baste para su rechazo recordar las conclusiones fácticas expuestas por las sentencias, tanto de primera, como de segunda instancia, las que concluyen que la actora no ha sido objeto de beneficios previos por parte de la demandada.

Hechos que, como tantas veces se ha dicho, resultan inamovibles conforme a la naturaleza de la protesta de nulidad que se analiza. Razones por las que, el supuesto fáctico en que descansa la causal en estudio no resulta concurrente, lo que deviene en su necesaria desestimación.

Sin perjuicio de lo anterior, es de utilidad exponer, como tantas veces se ha dicho por esta Corte, que no existe una incompatibilidad entre los beneficios que otorgan las leyes N°19.234, N°19.992, y N°20.874 y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, por lo que no existe motivo alguno para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos. A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las referidas leyes no importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral. (SCS Rol N° 9755-15 de 21 de junio de 2016; Rol N° 15298-18 de 19 de diciembre de 2018 y Rol N° 15402-18 de 21 de febrero de 2019, Rol 91583-21 de 4 de octubre de 2024).

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la historia fidedigna de la ley, que sumada a las características de los beneficios que ella otorga, permite concluir que no se logra el mismo propósito que se persigue con la indemnización



demandada en autos, como afirma la sentencia recurrida, pues no se trata de una reparación total del daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado, es que los beneficios pecuniarios obtenidos por la demandante tienen una naturaleza asistencial y por tal motivo, no privan a las víctimas del derecho a instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.

SEPTIMO: Que, en cuanto al segundo error de derecho denunciado que se sustenta en el hecho que la demandante no se encuentra calificada como víctima reconocida por el Estado en virtud de la Ley Valech N° 19.992; cabe señalar que la referida Ley en ninguna parte de su articulado limita o restringe la posibilidad de que las víctimas no reconocidas en su listado puedan demandar al Estado por su responsabilidad extracontractual.

Que la demanda tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, lo que resulta plenamente procedente, conforme fluye a los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República, motivo por el cual, la causal no puede prosperar.

OCTAVO: Que, en cuanto a la impugnación de fondo formulada por el Consejo de Defensa del Estado, en que reclama que en el establecimiento de la indemnización se vulneraron las leyes reguladoras de la prueba, indicando como tales los artículos 1698, 1700, 1704, 2314 todos del Código Civil y los artículos 341, 383 y 426 del Código de Procedimiento Civil, según la uniforme y reiterada jurisprudencia de esta Sala Penal, carecen del carácter de decisoria litis.

Que de la lectura del recurso y contrastado con los hechos reproducidos en el considerando segundo del presente fallo, el recurrente no demuestra la



imputación de haberse vulnerado tales disposiciones, pues únicamente se plantea una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia conforme a los cuales se estimó acreditada la concurrencia del daño moral, discordándose sólo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva, lo que fuerza el rechazo de la protesta en análisis.

NOVENO: Que, en cuanto al cuarto error de derecho denunciado, al rechazar la excepción de prescripción de las acciones civiles extracontractuales deducidas y concluir que éstas son imprescriptibles, negando así la aplicación del instituto de la prescripción como regla general de prescripción extintiva.

Al respecto, tal como se razonó previamente, debe recordarse que el derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º y en el artículo 6º de la Constitución Política.

DÉCIMO: Que, la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).



De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República que señala que “*el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*”.

De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de *ius cogens*, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.

UNDÉCIMO: Que, por último, debe recordarse que los hechos en que se funda la demanda caben dentro de la calificación de crimen de lesa humanidad y constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos y al efecto, reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, tratándose de un delito de esta especial naturaleza, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, como ya se indicó.



DUODÉCIMO: Que, de esta manera y conforme se viene razonando, resultan inconcurrentes las reclamaciones levantadas por la demandada en su recurso de casación, lo que lleva, en definitiva, a la desestimación del mismo.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, Rol 517-2022, la que, en consecuencia, no es nula.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama Rebolledo.

Regístrese y devuélvase.

ROL N° 237684-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H. y los Abogados Integrantes Sr. Raúl Patricio Fuentes M. y Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 01 de julio de 2025.



En Santiago, a uno de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

